

Nº 1062

LEON FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA,
Presidente Constitucional de la República.

Considerando:

Que el cultivo de especies bioacuáticas constituye un renglón importante dentro del aprovechamiento de los recursos nacionales y por ende de decisiva significación para la economía del país, en general;

Que es obligación del Estado promocionar, a través de estímulos eficientes, una racional y óptima utilización de estas especies, de manera que redunden en beneficio de toda la población ecuatoriana;

Que las disposiciones reglamentarias vigentes no responden a las necesidades de la hora presente ni satisfacen los requerimientos del sector;

Que por las circunstancias anotadas es preciso dictar normas reglamentarias actualizadas que dinamicen esta importante actividad; y,

En uso de las facultades que le confieren la Constitución y las Leyes,

Decreta:

**EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA
 CRÍA Y CULTIVO DE ESPECIES BIOACUÁTICAS**

CAPITULO I**DISPOSICIONES GENERALES**

Art. 1.— El Cultivo y cría de especies bioacuáticas comprende las fases de desove, cría y reproducción de las mismas, las que se realizarán cuidando de no interrumpir el proceso biológico en su estado natural con el objeto de obtener una producción racionalizada.

Art. 2.— El cultivo, y cría de especies bioacuáticas en aguas de mar, de fondos marinos, zonas intermareales, tierras altas sin vocación agrícola, cuerpos de aguas interiores y continentales, técnicamente permisibles, utilizando todos los sistemas artificiales y/o naturales que aseguren la explotación racional del ciclo vital de las especies, estará identificado en este Reglamento bajo la denominación de Piscicultura o Acuicultura y a las personas dedicadas a esta actividad como Piscicultores o Acuicultores.

Art. 3.— Áreas técnicamente permisibles son aquellas que sin afectar el sistema ecológico ni transformar la estructura orgánica del terreno, reúnen las condiciones químicas, físicas y biológicas para la explotación controlada de especies bioacuáticas. Igualmente no deben afectar áreas declaradas como parques nacionales, de reserva de cualquier índole, zonas influenciadas por programas de riego para agricultura o de desarrollo habitacional.

Art. 4.— Zona de playa y bahía, es la zona intermareal que está alternativamente cubierta y descubierta por el flujo y reflujo (pleamar y bajamar), de

las aguas del mar, desde el nivel medio de los bajamares de sicigia, hasta el nivel medio de las pleamares de sicigia, computados en un ciclo nodal de 18.61 años.

Art. 5.— Para dedicarse a la Piscicultura y/o Acuicultura se requiere la correspondiente autorización otorgada por el Ministro de Industrias, Comercio e Integración, representado por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, observando las disposiciones de este Reglamento y más leyes pertinentes.

Art. 6.— Cuando se trate de ejercer dicha actividad ocupando zonas intermareales consideradas como bienes nacionales de uso público (zonas de playa y bahía), la concesión de ocupación es obligatoria con sujeción a lo dispuesto en este reglamento, Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, Código de Policía Marítima y Ley de Aguas.

Art. 7.— En las construcciones de piscinas y viveros se dejarán franjas o zonas, de retro no menores de 500 metros medidos desde el límite de aquellas hasta el borde de las áreas agropecuarias, con el fin de proteger los cultivos agrícolas de las influencias salinas del agua y a la acuicultura del peligro que representa la utilización de insumos químicos en la agricultura. En igual forma se dejarán zonas de separación transitables entre las piscinas y viveros de por lo menos 4 metros.

CAPITULO II**De la autorización**

Art. 8.— Para obtener la autorización para ejercer la actividad piscícola y/o de acuicultura, en tierras altas sin vocación agrícola sean estas propias o arrendadas, se requiere la presentación de la correspondiente solicitud con los timbres de Ley, dirigida al Director General de Pesca acompañando los siguientes documentos y datos, en originales y duplicados en dos carpetas de igual contenido:

a) Nombres completos, nacionalidad, dirección domiciliaria y número telefónico del solicitante o solicitantes conjuntamente con la firma del abogado patrocinador;

b) Copia de las cédulas de identidad y tributaria, de ser extranjero, pasaporte con la correspondiente visa.

c) Planos del proyecto con ubicación geográfica con referencia obligatoria a la Carta del Instituto Geográfico Militar y del Instituto Oceanográfico de la Armada, si lo hubiera, en la escala 1: 50.000 o a la del Levantamiento planimétrico del mismo Organismo Militar. El plano del proyecto contendrá la distribución general de las piscinas y su diseño con la especificación de cortes de muros, estaciones de bombeo, canales de agua, servidumbres de tránsito, así como las zonas mencionadas en el Art. 7 de este Reglamento;

Los planos se presentarán en escala apropiada al área del proyecto. La precisión de un punto geodésico debe ser de tercer orden con el fin de delimitar el área del proyecto:

- d) Estudio técnico-económico del proyecto;
- e) Certificado conferido por el Ministerio de Agricultura en el que se indique que las tierras no tienen vocación agrícola y que por lo tanto no son aptas para cultivos de ese tipo.

Si el predio colinda con el mar, lago, río o estero, deberá constar en el plano la pertinente demarcación de zona de playa y bahía efectuada por la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral.

f) Título de propiedad y certificado de Registro de Propiedad con 15 años de historia de dominio y de gravámenes del predio destinado a la actividad bioacuática;

g) En tratándose de personas jurídicas, a más de los requisitos puntualizados en los literales anteriores, presentarán los Estatutos Sociales aprobados por el Organismo competente, nombramiento del representante legal debidamente inscrito, y certificado de cumplimiento de obligaciones para con la Superintendencia de Compañías, si se tratase de una sociedad sujeta al control de dicha Institución.

Art. 9.— Si la actividad bioacuática se le desea realizar en zonas intermareales se presentará la respectiva solicitud de autorización, acompañada únicamente del Acuerdo Interministerial de concesión.

Art. 10.— Una vez recibida la documentación completa, el Director General de Pesca se pronunciará en el término de 15 días como máximo sobre la legalidad y conveniencia del proyecto.

Si el informe fuese favorable remitirá toda la documentación al Subsecretario de Recursos Pesqueros para la elaboración del Acuerdo de autorización para ejercer la actividad pesquera en un plazo no mayor a 7 días. Si el pronunciamiento fuese negativo, ordenará el archivo de la solicitud con notificación al interesado.

Una vez suscrito el Acuerdo respectivo, la Subsecretaría de Recursos Pesqueros notificará a los interesados y remitirá una copia de este documento al Director del Registro Oficial para su publicación.

Art. 11.— Para efectos de impugnar o interponer el recurso contencioso administrativo, se contarán los plazos respectivos a partir de la fecha de publicación del Acuerdo correspondiente en el Registro Oficial.

Art. 12.— Quienes se dediquen a la acuicultura, además de las obligaciones establecidas en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, su Reglamento y demás legislación aplicable, deberán cumplir con lo siguiente:

- a) Prestar las debidas facilidades para las inspecciones y comprobaciones que las autoridades estimen del caso realizar;
- b) Vigilar y cuidar las áreas de manglares y zonas agrícolas colindantes y denunciar a las autoridades competentes los hechos atentatorios contra tales zonas;
- c) Utilizar los sistemas previstos por los organismos competentes para evitar la contaminación a la ecología del lugar;
- d) Llevar los libros de registro de siembra, cosechas, producción y venta;

e) Tener semilleros o precriaderos naturales y/o artificiales para asegurar el abastecimiento de larvas o alevines para sus programas de producción;

f) Observar y cumplir con las disposiciones de la Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Policía Marítima, sus reglamentos y demás leyes afines; y,

g) Obtener la matrícula anual de ocupación de zona de playa, en caso de ser concesionario.

Art. 13.— Se prohíbe a los acuicultores:

- a) Tapar esteros, ríos, canales u otras obras hidráulicas;
- b) Destruir o afectar manglares;
- c) Obstaculizar el libre tráfico de la navegación;
- d) Construir o alterar las propiedades físico-químicas y microbiológicas de los suelos con aptitud agrícola, ganadera y/o forestal colindantes;
- e) Conducir aguas servidas y residuales sin el empleo de medios técnicos que eviten la contaminación del medio;
- f) Instalar viveros o piscinas en zonas declaradas como áreas naturales del Estado; y,
- g) Tener más de una concesión o participar como socio o accionista en más de una persona jurídica concesionaria.

CAPITULO III De las concesiones

Art. 14.— Siendo las zonas intermareales o de playa y bahía nacionales de uso público, quienes deseen utilizarlas en actividades bioacuáticas deberán obtener previamente la correspondiente concesión.

Art. 15.— La concesión de zonas intermareales o de playa y bahía para fines de Acuicultura, es un acto administrativo mediante el cual el Estado a través de los Ministerios de Industrias, Comercio e Integración y el de Defensa Nacional, concede a Particulares el uso y goce de tales bienes nacionales de uso público por un tiempo determinado y sujeto a las condiciones que más adelante se expresarán.

Art. 16.— La concesión para la ocupación de playa y bahía en actividades bioacuáticas se otorgará a personas naturales o jurídicas sean nacionales o extranjeras.

Art. 17.— Las concesiones se otorgarán por un periodo de 10 años, prorrogables por periodos iguales únicamente sobre las áreas efectivamente trabajadas y explotadas técnicamente.

Art. 18.— A fin de que el mayor número de personas se dedique a la actividad piscícola y con el objeto de obtener una productividad adecuada por hectárea, estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

- a) El área que se otorgará a personas naturales será de hasta 50 hectáreas como máximo;
- b) Para las personas jurídicas se concederán 250 hectáreas como máximo;
- c) En los cuerpos de aguas de fondos arenosos, fangosos o rocosos y que sean destinados a semille-

ros, precriaderos o lugares de acopio, se otorgarán hasta 10 hectáreas siempre que no dificulten la libre navegación o a las áreas turísticas.

Las áreas de concesión para todos los literales indicados, deberán constituir un sólo cuerpo cierto.

Art. 19.— Para la obtención de una concesión y de conformidad con el Art. 52 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, se requiere la correspondiente autorización conjunta de los Ministerios de Industrias, Comercio e Integración y de Defensa Nacional, para lo cual se presentará en la Dirección General de Pesca las carpetas que se mencionan en el Art. 3, excluyendo los requisitos de los literales e) y f), con la siguiente documentación adicional:

a) Solicitud con los timbres de ley, dirigida a los Ministros de Industrias, Comercio e Integración y de Defensa Nacional;

b) Planos con el levantamiento planimétrico y altimétrico indicando su área referida (amarrada) a un punto central con coordenadas de tercer orden geodésico y con la respectiva demarcación de la zona de playa y bahía solicitada, debidamente aprobado y revisado por la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral y con la firma y número de Registro de personal responsable;

c) Certificación de la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral de que el área solicitada está formada exclusivamente por zona intermareal, que excluye manglares, que no existe litigio y que el peticionario no tiene otra concesión a su favor;

d) Los datos y documentos mencionados en el literal a) del Art. 3, que deberán referirse a cada uno de los socios si se tratare de una persona jurídica.

e) Autorización del Presidente de la República y del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración si el peticionario como persona natural o como socio de una persona jurídica fuere extranjero.

Art. 20.— Recibida la documentación anterior, el Director General de Pesca en el término de 15 días deberá pronunciarse sobre la procedencia de lo solicitado, remitiéndola a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Si el informe es favorable y recibiere la aprobación del Subsecretario se procederá a formular el Acuerdo de Concesión correspondiente que será suscrito por los Subsecretarios de Recursos Pesqueros y de Defensa Nacional como delegados de los respectivos Ministerios de Estado.

Art. 21.— Dentro de los 90 días posteriores a la promulgación del Acuerdo de concesión al que se refiere el Art. 20, de este Reglamento, el concesionario obtendrá la matrícula de ocupación en la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, la que deberá renovarse anualmente previo el pago de los derechos correspondientes.

De no cumplirse con lo dispuesto en el inciso anterior, quedará sin efecto el Acuerdo de Concesión, sin perjuicio a las sanciones previstas en el Art. 79 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.

Art. 22.— Para la renovación de la concesión se presentará una solicitud dirigida a los Ministros de Industrias, Comercio e Integración y de Defensa Na-

cional, por lo menos con tres meses de anticipación a la fecha en que expire la concesión. Esta solicitud se tramitará a través de la Dirección General de Pesca.

Art. 23.— Aquellos que no desearan renovar su concesión, tendrán derecho, previa autorización de la Dirección General de Pesca y de la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, a continuar ocupando por el lapso de un año más el área concedida, con el propósito de aprovechar las especies cultivadas que les pertenecen, pagando por ese año adicional los derechos correspondientes.

Esta solicitud se presentará por lo menos con tres meses de anticipación a la fecha de vencimiento de la concesión.

Art. 24.— Si el concesionario abandonare la concesión, o en los casos de revocación de la concesión por las causales previstas en este Reglamento, el suelo y las obras se reversion al uso y goce el Estado de conformidad con el Art. 637 del Código Civil.

Los interesados que desearan en concesión las áreas revertidas al Estado, deberán pagar el valor de las obras de infraestructura existente, pago que beneficiará en partes iguales a la Dirección General de Pesca, Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral y que servirá para el cumplimiento de sus fines específicos.

Art. 25.— Los concesionarios podrán asociarse, para lo cual deberán presentar una solicitud adjuntando un estudio técnico económico que justifique dicha asociación. El Subsecretario de Recursos Pesqueros de considerarlo conveniente lo aprobará mediante resolución.

Art. 26.— Los derechos de concesión no podrán cederse ni enajenarse a ningún título, salvo el caso de excepción previsto en el Artículo siguiente.

Para el caso de fallecimiento de un concesionario, el cónyuge sobreviviente o sus herederos tendrán derecho a seguir explotando la concesión y a que se les prefiera al solicitar una nueva concesión sobre dichos predios.

La solicitud respectiva se presentará dentro de los 180 días posteriores al fallecimiento del concesionario, debiendo adjuntarse la partida de defunción correspondiente y los documentos que justifiquen la calidad del cónyuge sobreviviente o de herederos de los solicitantes.

Art. 27.— Los concesionarios de bienes nacionales de uso público y que deseen conformar una persona jurídica, podrá ceder a ésta sus concesiones previa autorización otorgada por los Subsecretarios de Recursos Pesqueros y de Defensa Nacional para lo cual se presentará en la Dirección General de Pesca la correspondiente solicitud acompañando los siguientes documentos:

- a) Escritura de Constitución;
- b) Nombramiento del representante legal;
- c) Registro Unico de Contribuyentes;
- d) Estudio Técnico-económico;
- e) Copia de los Acuerdos Interministeriales de la concesión;

f) Certificado de pago de los derechos de ocupación correspondiente al año en que se hace el traspaso;

g) Declaración jurada del representante legal, en la que certifique que el concesionario es socio e indique el número de acciones o participaciones de su propiedad.

Art. 28.— Anualmente y previo el otorgamiento de la matrícula de ocupación, las Direcciones Generales de Pesca y de la Marina Mercante y del Litoral realizarán una inspección, a fin de evaluar los trabajos que han realizado los concesionarios, de lo que se dejará constancia en el correspondiente informe y que será tomado en cuenta en la evaluación del Art. 32.

Art. 29.— Las concesiones terminarán por las siguientes causas:

- a) Al fenecer el plazo;
- b) A solicitud del concesionario;
- c) Por fallecimiento del concesionario, si el cónyuge sobreviviente, los herederos y derecho habientes no procedieren en el plazo señalado a solicitar la expedición de una nueva concesión a su favor;
- d) Si el representante del interdicto no concurre en el plazo de noventa días a la fecha en que ha sido declarado como tal a representarle en sus obligaciones contraídas con el Estado;
- e) Si el concesionario cedere o enajenare total o parcialmente los derechos de concesión sin la autorización correspondiente;
- f) Cuando se utilice el área concedida en actividades distintas a las autorizadas;
- g) Si en el plazo de doce meses de expedido el Acuerdo Interministerial de concesión no se hubieren realizado los trabajos de ejecución de las obras de infraestructura propias del proyecto a ejecutarse, al menos en un 15% de lo programado;
- h) Por la causa establecida en el Art. 21 de este reglamento y previa notificación por la prensa;
- i) Por quiebra o disolución;
- j) Por la ocupación de una área mayor a la concedida;
- k) Por abandono total de la concesión, y
- l) Por tala de manglares o incumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias; especialmente las contempladas en los Arts. 7 y 12 de este Reglamento.

Art. 30.— Producida cualquiera de las causales señaladas en el artículo precedente, la Dirección General de Pesca solicitará un informe a la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral y comunicará al interesado, a fin de que en el término de 15 días, presente las respectivas pruebas de descargo. Concluido el referido término y una vez que disponga del señalado informe, la Dirección General de Pesca emitirá su resolución.

De comprobarse la causal de extinción, se enviará el informe correspondiente a los Ministerios respectivos para que se expida el Acuerdo Interministerial que declare terminada la concesión.

Art. 31.— El Acuerdo Interministerial de terminación de la concesión deberá indicar el plazo para que el concesionario proceda a desocupar la zona; con-

cluido el cual, la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral, ordenará la suspensión de todo trabajo y procederá al desalojo.

Art. 32.— Transcurridos dos años desde la fecha de expedición del Acuerdo Interministerial de concesión, la Dirección General de Pesca, realizará una evaluación del volumen de obras realizadas, la programación trazada y la situación financiera. De comprobarse que no existe justificación técnico-económica, para no haber explotado por lo menos el 50% de la concesión total, se procederá a modificar el Acuerdo correspondiente, reduciendo al área efectivamente trabajada, sin perjuicio de dar una ampliación de plazo no mayor a un año, dependiendo del resultado de la evaluación. El Acuerdo de reducción contemplará los límites establecidos en el Art. 18.

Art. 33.— La pérdida de la calidad de concesionario, cualesquiera que sea su causa, lleva implícita la obligación de cancelar los derechos correspondientes.

CAPITULO IV De las sanciones

Art. 34.— Quienes infringieren lo dispuesto en los Arts. 5 del presente reglamento u ocuparen zonas intermareales de playas y/o bahías sin obtener de forma previa el correspondiente Acuerdo de Concesión, incurrirán en las sanciones previstas en el Art. 79 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero sin perjuicio de que se pueda ordenar la suspensión definitiva de actividades y trabajos que estén realizando, si en el plazo de noventa días no cumplieren con dichos requisitos.

Art. 35.— Quienes ocuparen bienes nacionales de uso público en extensiones mayores que las concedidas o que las hubieren cedido sin autorización o que hubieren talado manglares o que las hubieren utilizado con fines distintos a los autorizados, serán sancionados con la terminación de la concesión sin perjuicio de las sanciones previstas en el Art. 79 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y los Arts. 81 y 82 de la Ley Forestal.

Art. 36.— Las infracciones a lo dispuesto en los Arts. 7 y 12 del presente Reglamento, darán lugar a la aplicación de las sanciones que se contemplan en los Arts. 79 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.

Art. 37.— Las infracciones a lo dispuesto en el Art. 13 de este Reglamento, darán lugar también a la terminación de la concesión o a la aplicación de las sanciones previstas en el Art. 80 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.

DISPOSICION TRANSITORIA

Revertirán al Estado los bienes nacionales de uso público otorgados en concesión, sin derecho a indemnización alguna, si en el plazo de noventa días, contados a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial, los actuales conce-

sionarios cuyos acuerdos interministeriales de concesión tuvieran más de dos años de vigencia no hubieran realizado trabajos de infraestructura que representen al menos el 10% del estudio técnico-económico aprobado para el caso.

DISPOSICION FINAL:

Derógase los Acuerdos Ministeriales Nos. 12771 de 5 de septiembre de 1975, publicado en el Registro Oficial Nº 889 de 15 de septiembre de 1975; 14425 publicado en el Registro Oficial Nº 640 de 1º de agosto de 1978; y, 14656 expedido el 17 de enero de 1979, publicado en el Registro Oficial Nº 760 de 26 de enero de 1979.

De la ejecución del presente Decreto que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a los señores Ministros de Defensa Nacional y de Industrias, Comercio e Integración.

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 26 de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.

f.) León Febres Cordero Ribadeneyra, Presidente Constitucional de la República.— f.) Luis Piñeros Rivera, Ministro de Defensa Nacional.— f.) Xavier Neira Menéndez, Ministro de Industrias, Comercio e Integración.

Es fiel copia.— Lo certifico:

f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública